

41.^a REUNION - 35.^a SESION ORDINARIA - SEPTIEMBRE 27 DE 1862

Presidencia del señor NAVARRO

Senadores presentes: Alsina, Borges, Carril, Cullen, Daract (D. M.), Delgado, Elizalde, Ferré, Gallo, Gómez, González, Madariaga, Moreno, Navarro, Piñero, Rawson, Redruello, Uriburu, Vega, Vélez Sársfield.

Senadores ausentes, con aviso: Daract (D. J.) y Zegada.

Senadores ausentes, con licencia: Paz y Rojo.

SUMARIO

- 1.—Despachos de Comisión.
- 2.—Licencia al senador suplente señor Zegada para faltar a las sesiones.
- 3.—Aprobación del dictamen de las comisiones de Hacienda y Peticiones en las solicitudes de los señores M. Cabal, Puig y Clavero, Guido y Señorans.
- 4.—Aprobación del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que determina se levante el censo general de la República.
- 5.—Aprobación con modificaciones del proyecto de ley de la Comisión de Legislación, sobre la organización del Poder Judicial de la Nación.
- 6.—Determinación de orden del día para la próxima sesión.
- 7.—Indicación sobre la necesidad de un local para celebrar sesiones diarias.
- 8.—Indicación sobre la designación del día en que debe celebrarse el escrutinio de las elecciones de presidente y vice de la República.

En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de Septiembre del año del Señor de mil ochocientos sesenta y dos, reunidos en su sala de sesiones el señor vicepresidente provisorio y demás señores senadores arriba inscriptos, con inasistencia de los señores Daract (D. Justo) y Zegada

por indisposición, y ausentes de la ciudad con licencia, los señores Paz y Rojo, se declaró abierta la sesión, y se leyó y aprobó el acta de la anterior de veinticinco del corriente (34.^a ordinaria).

1

Se dió cuenta después de esto, de haberse expedido la Comisión de Hacienda sobre el privilegio exclusivo solicitado por don Mariano Cabal, para el sistema de su invención de conservar por largo tiempo las carnes alimenticias, aconsejando pasara a informe del Poder Ejecutivo; y la de Peticiones en la del señor Puig y Clavero, también sobre un descubrimiento de un sistema para la conservación de las carnes; del señor Guido, sobre introducción de un nuevo gusano de seda; y Señorans sobre un sistema de su invención para convertir la sangre en huano incorruptible y antiinflamable, aconsejando igual resolución que la de Hacienda.

2

Se leyó en seguida una nota del señor senador suplente por Junuy, doctor Escolástico Zegada, fecha de ese día, pidiendo licencia para retirarse al fin de este mes, fundado en que varios establecimientos píos cuidados por él en aquella ciudad reclamaban urgentemente su presencia allí, y el mal estado de su salud que

Sr. Rawson. — Agregaré una sola palabra más respecto de este punto, que conviene dejar esclarecido. El artículo 107 de la Constitución, establece que los gobiernos de provincia son agentes naturales del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Que son agentes, cuando el Poder Ejecutivo nacional lo estime conveniente para el cumplimiento de la ley. ¿Y esto importa que los gobiernos de provincia se refusen a prestar su cooperación cuando les es reclamada? De ninguna manera: esto importa que en todos los casos ocurentes de la administración nacional, cuando sea necesario, tengan que cumplir las órdenes que reciban. El censo, por ejemplo, como se ha dicho, es un trabajo muy pesado. Si dejamos al Poder Ejecutivo nacional que manda practicar el censo, se dirigirá a los gobiernos de provincia, como agentes que son, y esos gobiernos se han de constituir en servidores exclusivos de la Nación, para ese caso dado. Esto es muy obvio y claro, y esto es lo que quiere la soberanía provincial. El gobierno nacional manda en el territorio de la Nación, y tiene derecho, por ejemplo, en este caso del censo, para poner una multa al individuo argentino o extranjero residente en él, que se resista a dar su nombre.

Se ha expuesto una razón, que a mi juicio es muy atendible, por la cual es conveniente, sino indispensable, que la operación se verifique por intermedio de autoridades nacionales nombradas por el Poder Ejecutivo de la Nación, y es que pueden haber intereses provinciales que tiendan a adulterar el resultado positivo del censo: esto es muy claro, y yo deploro que las doctrinas de los Estados Unidos no sean bastante conocidas. Yo creo que demarcando bien y separando todo lo que es provincial de lo que es nacional, nunca se puede caer en el desquicio, practicando todo esto en el espíritu de la Constitución, y no venir a decir que las provincias manden en su casa y la Nación en la suya.

Sr. Alsina. — Fué el señor senador quien lo dijo primero y hay ultraje...

Sr. Rawson. — Yo digo que no es ultraje.

Sr. Alsina. — Yo sostengo que lo es, decir que los gobiernos de provincia...

Sr. Rawson. — No he dicho eso.

Sr. Elizalde. — Podría votarse.

Dado el punto por suficientemente discutido, se puso a votación el dictamen de la Comisión, el que fué rechazado por 10

votos contra 9. En seguida se pasó a cuarto intermedio y vueltos los señores senadores a sus puestos dijo el:

Sr. Vélez Sársfield. — Hemos conferenciado largamente sobre el modo de uniformar las opiniones en este proyecto. Desechada ya la minuta de comunicación que presentaba la Comisión, quedaba sólo el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Las adiciones que se podían hacer era a la parte reglamentaria. De manera que el mejor medio que hemos encontrado, es concluir este asunto sancionando el proyecto remitido por la Cámara de Diputados. De manera que lo mejor es poner a votación ese proyecto.

Sr. Alsina. — Estados de acuerdo.

Puesto a votación el proyecto remitido por la Cámara de Diputados, fué aprobado tanto en general como en particular, por afirmativa general, en estos términos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

1º. — Conforme al artículo 39 de la Constitución levátese un censo general de la población en cada una de las provincias que componen la Nación.

2º. — El Poder Ejecutivo caracterizará comisarios nacionales, que de acuerdo con la autoridad local y conforme a las reglas que al efecto prescriba el Ejecutivo nacional, presidan e inspeccionen el empadronamiento de cada provincia.

3º. — El Poder Ejecutivo está facultado para invertir del tesoro nacional la cantidad necesaria para el cumplimiento de la presente ley.

4º. — Los miembros del Congreso, durante el receso de sus sesiones, podrán admitir las comisiones de que habla el artículo 2º.

5º. — Comuníquese, etc.

Sr. Elizalde. — En antecala nos hemos reunido varios senadores, con el objeto de ver si podíamos hacer que se sancione lo más antes posible, el proyecto de ley que ha redactado la Comisión de Legislación sobre justicia nacional. Este proyecto de ley ha sido publicado y ha recibido una pública aceptación. Lo hemos estudiado detenidamente y creo que la Comisión ha hecho cuanto es posible hacer. De

Septiembre 27 de 1862

CAMARA DE SENADORES

11.ª Reunión, 35.ª Sesión ordinaria

manera que yo propondría que con él se hiciera lo que se practicó con el Código de Comercio, y por eso hemos pensado presentar una moción en ese sentido, con tres pequeñas modificaciones que se indicarán. Pido el apoyo de mis colegas.

— Apoyado.

(Las modificaciones consisten en redactar los artículos 6.º, 7.º y 23 como registran al final).

Sr. Vélez Sársfield. — Tenemos derecho los abogados para pedir un voto de confianza, con relación a este proyecto. Así yo estoy conforme enteramente con lo que acaba de proponer el señor senador, con esas modificaciones que él ha anunciado. Hay, sin embargo, una parte de esa ley, la relativa a los sueldos, con la que no puedo estar conforme. Yo no puedo pasar que un juez de primera instancia en los tribunales de que hablamos, que solamente tendrá una que otra causa, goce 2.500 pesos de sueldo, más que los gobernadores, y sobre ese punto no hay necesidad de pedir voto de confianza. Así yo digo que votemos todo el proyecto, menos lo relativo a los sueldos.

Sr. Elizalde. — Muy bien puede dejarse ese punto para discutir, cosa que no será larga, y sancionar por una votación lo demás del proyecto.

Sr. Presidente. — ¿No cree necesario la Cámara que se lea para hacerse mención en el acta?

Sr. Elizalde. — Que se lea la nota de la Comisión.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1862.

A la Honorable Cámara de Senadores.

Larga y penosa ha sido la tarea que la Comisión de Legislación se impuso, con la mira de elaborar un proyecto de ley que organizara completamente el Poder Judicial de la Nación, y aunque ha sido auxiliada por las luces de otros señores senadores, no se lisonjea con la creencia de haber llenado aquel objeto, en el que tiene el honor de someter a la ilustrada consideración del Senado.

Ni debe esto extrañarse. De los tres altos poderes que la Constitución reconoce: el Legislativo y el Ejecutivo, son fácilmente organizables porque en cuanto a ellos hace larguísimo

tiempo que el país posee principios y prácticas: más en cuanto al Judicial, y mucho más en un sistema federativo de gobierno, sucede todo lo contrario. No hay a su respecto prácticas de ningún género, no hay principios que la generalidad conozca, no hay doctrinas recibidas, no hay antecedentes. Todo es preciso irlo creando a medida que ese poder se vaya estableciendo.

Aun para esto sólo un modelo encontramos en la historia judicial de las naciones: el de los Estados Unidos. Mas la imitación de ese modelo tiene para nosotros bien serios inconvenientes, nacidos de que nuestra Constitución copió literalmente e irreflexivamente esta parte de la de los Estados Unidos, que tiene mucho de inaplicable a la República Argentina. Mas al fin, esa es nuestra ley; la Comisión ha debido acatarla y ajustarse a ella, lo cual ha sido una de las dificultades que ha tocado.

Se han agregado a ella las que naturalmente nacían de las especialidades de estos países, de sus costumbres o hábitos judiciales, de la falta de hombres competentes en el crecido número que habría que emplear y de la actual carencia en el pueblo de nociones teóricas y prácticas en la materia.

En vista de esto, la Comisión después de escogitar otros arbitrios, al fin se decidió a proponer la creación de la Corte Suprema y de los juzgados seccionales, suspendiendo por ahora la de las cortes o tribunales de distrito, intermediario entre aquélla y éstos.

El Congreso se halla perfectamente autorizado por la Constitución para este proceder, pues ella al declarar las diversas atribuciones y funciones del Poder Judicial nacional y de adscribir algunas de ellas precisamente a la Corte Suprema, deja libre la acción del Congreso para crear y organizar los tribunales y juzgados inferiores del modo que mejor lo estime.

Por eso es que la Comisión, después de atribuir a la Suprema Corte el conocimiento de aquellas causas que la Constitución le ha atribuido, reparte entre ella y los juzgados seccionales o de primera instancia el conocimiento de todas las demás que corresponden a la jurisdicción nacional. El tiempo y la experiencia señalarán el momento en que sea útil y posible crear las cortes de distrito, y entonces se hará fácilmente una nueva distribución de las funciones indicadas.

Por ahora no debemos entrar en el quimérico empeño de andarlo todo de una vez. El Poder Judicial nacional, completado, debe ser la obra de varias leyes sucesivas. Hoy empezamos colocando las grandes bases de este edificio:

procuremos que se cimente, que se haga sentir y conocer; mañana emprendemos darle más altura y extensión.

Una gran ventaja encuentra, por otra parte, la Comisión en este proceder. Es imposible, señores, implantar de súbito toda una nueva organización judicial en un país que absolutamente no la conoce. Háil es ordenarlo, trazándolo sobre el papel; no lo es, empero, el realizarla. El más probable resultado sería imposibilitarla para siempre porque caería infaliblemente en odio o desprestigio.

Bien se deducirá de lo expuesto, que la ley que la Comisión propone en materia tan desconocida como complicada, adolece, y debe adolecer necesariamente, de notables deficiencias; porque además de no comprender ella sino la parte esencial de la ley orgánica del Poder Judicial, mas no el todo de esta, la Comisión, guiada por los motivos indicados, ha cuidado mucho de no recargarla con menudencias y detalles.

Tales son, señores, aunque en compendio, las razones y vistas generales de la Comisión, y ellas serán debidamente ampliadas en la discusión por el miembro informante.

Pero al terminar, séale permitido añadir unas rápidas indicaciones, que, aunque ajenas del texto del proyecto, se refieren al asunto de que él se ocupa.

Deseando la Comisión que se adopten cuantas providencias puedan facilitar la inteligencia, la planteación y la marcha del sistema judicial nacional, cree que una de ellas es el hacer popular, puede decirse, las nociones y doctrinas relativas. Estas se hallan derramadas en varias obras de importancia escritas, por lo común, en idioma inglés. Convendría, pues, que el Congreso por sí, o al menos el gobierno, nombrase una comisión de hombres adecuados encargada de entresacar, traducir y compilar cuanto fuese necesario para formar un tratado, o al menos un manual ilustrativo y explicativo del sistema judicial de los Estados Unidos, bajo todas sus relaciones de aplicación al nuestro. Importaría igualmente que el Congreso o al menos el gobierno, ordenase ya que en las universidades y academias de jurisprudencia de la República, se emprendiese el formal estudio de esta parte de nuestro derecho público. Puesto que ese sistema ha de ser el del país, no puede desconocerse la necesidad de que él sea meditadamente enseñado.

La Comisión espera de la indulgencia del Senado, querrá disculpar esta especie de digresión a que la impulsa el muy sincero deseo

que la anima de que esta institución llegue a ser una realidad entre nosotros.

Dios guarde a vuestra honorabilidad muchos años.

Agustín J. de la Vega. -- Valentín Alsina. -- Angel Navarro.

—Puesto a votación en seguida si se aprobaba el proyecto presentado por la Comisión, con las modificaciones a los artículos 6º, 7º y 23, menos en la parte relativa a los sueldos, así se resolvió por afirmativa general. Púsose en seguida a discusión el artículo relativo a los sueldos.

Sr. Vólez Sársfield. — Yo creo que estos sueldos son excesivos; no quiero que un juez de primera instancia del Tribunal de Justicia Federal vaya a tener 250 pesos de sueldo, cuando los de provincia tienen apenas 50; esto es excesivo. Yo sé más o menos, lo que gana un abogado; la mayor parte se da por muy servido con 100 pesos mensuales y es más o menos lo que gana actualmente en Buenos Aires un juez de primera instancia que tiene 100 procesos diarios. Repito que todos estos sueldos los encuentro excesivos. Es cierto que por regla general los jueces deben ser bien dotados para que sean independientes, pero es bueno no exagerar este punto e ir a parar a que estos empleos sean una verdadera canongía, por los poquísimos asuntos de que tienen que ocuparse.

Ojalá fuera posible que los jueces fuesen independientes, pero estos empleos si les ponemos esa dotación, van a ser solicitados por todos aquellos que no sean capaces de desempeñarlos. No sé, pues, que dotando exageradamente estos empleos tengamos mejores empleados; al contrario, todos aquellos que no pueden ganar los 3.500 pesos con su trabajo, van a pretender ser jueces de primera instancia. De consiguiente, yo creo que por la dignidad del empleo basta ponerle una dotación superior a los miembros del Tribunal de Justicia de Buenos Aires.

Sr. Alsina. — No hago oposición a las ideas que acaban de manifestarse, pero sí debo indicar las razones que yo al menos, tuve para adherirme a lo que el proyecto propone. Francamente hablando, yo ignoro el estado intelectual o científico de muchas de las provincias. Procuré informarme y se me dijo que, por lo general, había gran carencia de letrados; que había algunas en que no existía sino uno o dos y en otras ninguno. En tal estado, es de necesidad que de una provincia vayan letrados

Septiembre 27 de 1862

CAMARA DE SENADORES

41ª Reunión. 35ª Sesión ordinaria

dos a las otras. Para la provincia de Tucumán, por ejemplo, pueden ser sacados de Buenos Aires, de Mendoza, quien sabe de dónde. No hay, pues, que confundir la condición de los jueces de las provincias, con la de los jueces de Buenos Aires, porque éstos no tienen que moverse para desempeñar sus cargos, ni que salir del seno de sus familias, de sus comodidades, etcétera. Entonces se palpó la necesidad de allanar esa clase de dificultades, ofreciendo un sueldo alto — porque yo lo reconozco como tal — pero ese ha sido el motivo.

Relativamente al recargo del tesoro, tuvo presente la Comisión otras consideraciones. Ella, en el proyecto que ha elaborado, ha suprimido en los juzgados seccionales una magistratura. En la ley que se dictó en Paraná sobre esta materia, se establecían fiscales de los juzgados inferiores y la Comisión los ha suprimido; ha ahorrado, digamos así, multitud de sueldos de bastante consideración, precisamente con la mira de que con el ahorro que se hace a este respecto, pueda aumentarse a un grado considerable el sueldo de los jueces.

Si es o no mucho el de 250 pesos, yo no lo sé; y si lo fuese, no me opongo a que se reduzca; eso lo sabrán mejor que yo los señores senadores que han venido de las provincias. Lo mismo digo de los miembros de la Suprema Corte; si es demasiado, de ningún modo me opondré a la rebaja; pero con esa dotación se ha creído que se consultaban a la vez los diferentes objetos que es preciso no perder de vista en esta materia.

Sr. Ferré. — A mí me consta, señor, que en la provincia de Santa Fe no se ha podido obtener abogado para que fuera a ejercer cualquiera de esas funciones y nadie ha querido, a pesar de ofrecérseles más de cien pesos. Es por eso que aun allí en Santa Fe los empleados provinciales en ese ramo ganan ciento cincuenta pesos.

Sr. Madariaga. — Lo mismo sucede en Corrientes.

Sr. Vélez Sársfield. — ¿Cuánto gana un general en Corrientes?

Sr. Ferré. — La ley nacional lo dice.

Sr. Vélez Sársfield. — Pero, ¿cuánto es?

Sr. Madariaga. — Los generales pueden suprimirse, pero los jueces no.

Sr. Vélez Sársfield. — Es preciso no aumentar tanto el sueldo, que vengamos a darle más a un juez de primera instancia que a un brigadier general de la Nación; y por eso es que pregunto cuánto gana un general. Compárese el sueldo de los militares con el de los empleados de la Corte de Justicia y se verá que éstos

están mejor dotados que un general que ha servido veinte años al país. Digo, pues, que no conviene aumentar los sueldos así, y de balde se nos viene con que en Santa Fe, o que en Rosario se hacen milagros, como si no conociéramos lo que son esos pueblos.

Sr. González. — Será pobre Rosario; pero no es indigno de citarse en el Senado, y se trae su ejemplo, porque son jueces que se van a pagar en Rosario.

Sr. Vélez Sársfield. — Se les pagaría en honros o en otra cosa.

Sr. González. — Pero no se aje a la provincia por eso.

Sr. Vélez Sársfield. — No es ajar a la provincia; pero no presentemos este escándalo, porque si vamos a aumentar así a todos los empleados de la administración en general, no habría rentas con qué pagarles.

Sr. Ferré. — Pero no se toque los extremos, señor senador.

Sr. Cullen. — Había pedido la palabra, para citarle, por más que no quiera el señor senador, Rosario.

Sr. Vélez Sársfield. — Para lo que me importa a mí las citas de Rosario.

Sr. Cullen. — Le iba a decir al señor senador, que no crea que ha de encontrar jueces en Rosario por cien pesos.

Sr. Vélez Sársfield. — Póngale ciento veinticinco, entonces.

Sr. Madariaga. — Se puede partir la diferencia, poniendo ciento cincuenta pesos.

Sr. Cullen. — Yo considero que con el sueldo de cien pesos no se han de encontrar empleados que quieran ejercer esas funciones, tanto más cuanto que las provincias no están bien dotadas; y aun cuando el señor senador por Córdoba no quiere que le hagan citas, es forzoso hacerlas para establecer la diferencia. Los jueces que existen hoy en Rosario tienen doscientos pesos, que no son pagos con papeles, como dice el señor senador por Córdoba, sino en moneda corriente, con toda religiosidad.

Sr. Vélez Sársfield. — ¿Desde cuándo acá?

Sr. Cullen. — Desde que hay gobierno en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se puede creer que con cien pesos de sueldo, se van a conseguir esos empleados en provincias en las que no hay abogados, que es necesario llevarlos de otra parte? Yo no estoy porque el sueldo sea crecido; pero con el de cien pesos, desde ahora puedo asegurar que no se encontrarán empleados.

Sr. Vélez Sársfield. — Tenga presente el señor senador, que en Buenos Aires, en empleos que hay que trabajar todo el día, como el asesor, que tiene trescientos expedientes, sólo ga-

na dos mil quinientos pesos papel; y el fiscal que tiene que acusar todos los días, que pedir la pena de muerte contra todos los presos, sólo tiene dos mil pesos. Digo, pues, que el juez ordinario de Rosario tiene bastante con doscientos pesos. Habrá muchos negocios en Rosario o Santa Fe; pero de negocios nacionales, no hay sino unos cuantos pleitos al año. Así es que el juez federal es una cosa muy distinta.

Sr. Vega. — En primer lugar, como dijo mi honorable colega de la Comisión, es bien sabido que en algunas provincias no hay abogados capaces de desempeñar esta magistratura; y en tal caso, el Poder Ejecutivo tendrá que mandar abogados de crédito para que ocupen estos puestos. No se toma, pues, por lo que valga el trabajo material, sino que es preciso tener presente cuando se trate del pago de estos empleados, que para aceptar estos empleos es necesario renunciar al ejercicio de su profesión, lo cual es necesario tenerlo muy en cuenta.

No es exacto tampoco lo que ha dicho el señor senador por Córdoba, que un abogado en las provincias no gana más de cien patacones, porque hay abogados que ganan muchísimo más.

Los sueldos que hoy ganan, al menos en la provincia de Tucumán, son de dos mil pesos los jueces de primera instancia, y en Córdoba ganan lo mismo. No es tampoco cierto que en la provincia de Buenos Aires ganen tan poco, puesto que ganan el equivalente de doscientos cincuenta patacones, es decir, cinco mil pesos papel. No es tampoco cierto que el fiscal gane tres mil pesos papel, porque el fiscal puede defender. De consiguiente, si vamos a estrechar tanto estos sueldos, quiere decir que no se encontrarán abogados capaces de desempeñar estos cargos.

La Administración de Justicia, señor, es uno de los altos poderes nacionales...

Sr. Vélez Sársfield. — Ya se va a la regla general, al monte, como se dice.

Sr. Vega. — Digo, pues, que con los sueldos asignados, no se hace más que conciliar las dificultades que se tocan, porque de otro modo, ningún abogado de crédito ha de aceptar esos puestos. Lo mismo digo respecto de los miembros de la Corte Suprema, que es la que va a formar la verdadera jurisprudencia, la que va a hacer prácticas nuestras instituciones, la que va a reglamentar los tribunales, en fin, los miembros que van a formar parte de ese cuerpo, no pueden tener menos de la dotación que la Comisión les asigna: todos los abogados de crédito en Buenos Aires, tienen doble más que

eso, y es necesario tener presente que para ir a las provincias han de pedir más.

Sr. Vélez Sársfield. — Los miembros de la Cámara de Justicia de Córdoba, tienen los dos mil pesos que le ponen ahora al juez de primera instancia nacional, es decir: para que entienda de una que otra causa de la jurisdicción federal, se le ponen dos mil pesos.

Sr. Vega. — Claro es que una provincia que no tiene recursos, tiene que dotar con menos cantidad a sus empleados que la Nación. En estos jueces va a descansar nada menos que el importante ramo de la administración de justicia, que es un poder respetable por su origen, y respetable por su jurisdicción: no han de hallarse, digo, abogados de crédito, por menos cantidad, y es preciso no hacer una cosa ilusoria.

Sr. Elizalde. — Vamos a ver si transamos esta cuestión, señor.

Sr. Vega. — Por mi parte, no estoy conforme con eso.

Sr. Elizalde. — Bien, vamos a ponerles doscientos pesos.

Sr. Vélez Sársfield. — Nunca han ganado más, porque no es cierto lo que dice el señor senador por Tucumán, que sea necesario nombrar abogados de primera clase para jueces de primera instancia.

Sr. Elizalde. — Vamos a votar primero lo que deben ganar los miembros de la Corte Suprema.

Sr. Cullen. — Yo acepto la indicación del señor senador por Buenos Aires, es decir, cuatrocientos pesos a los miembros de la Corte Suprema.

Sr. Alsina. — Puede ponerse en el artículo 1º: la Corte Suprema se compondrá de tantos jueces, y cada miembro de la Corte Suprema, incluso al procurador general, tendrá el sueldo de cuatrocientos pesos.

Sr. Presidente. Si la Comisión está conforme, se votará así.

Se leyó el artículo con la adición propuesta por el señor Alsina.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba o no este artículo conforme se ha leído.

Se votó y resultó afirmativa contra 3.

Septiembre 27 de 1862

CÁMARA DE SENADORES

41ª Reunión, 35ª Sesión ordinaria

Sr. Elizalde. -- Ahora debe votarse si se le asignan doscientos pesos a los jueces de primera instancia.

Se votó y resultó afirmativa general, quedando el proyecto sancionado en estos términos:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Naturaleza y funciones generales del Poder Judicial Nacional

Artículo 1º -- La justicia nacional procede siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales a la decisión de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de ministros o agentes públicos, de simples individuos, de provincias o de la Nación.

Art. 2º -- Nunca procede de oficio, y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.

Art. 3º -- Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales que esté en oposición con ella.

Art. 4º -- Conoce y decide en todos los asuntos regidos por la Constitución y leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los artículos 100 y 101 de la Constitución; pero cuando fuere llamada, de conformidad con el artículo 100, a juzgar entre vecinos de diferentes provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales.

Art. 5º -- No interviene en ninguno de los casos en que, compitiendo su conocimiento y decisión a la jurisdicción de provincia, no se halle interesada la Constitución ni ley alguna nacional.

CAPÍTULO II

De la Corte Suprema

Art. 6º -- La justicia nacional se ejercerá por medio de una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco ministros, y un procurador general.

Art. 7º -- La Corte Suprema conoce: 1º Originaria y exclusivamente de las causas en que se interesen embajadores, ministros, cónsules, vicecónsules, y de aquellas en que sea parte una provincia. 2º Por ahora y hasta que se organicen los Tribunales Superiores de distrito, conoce en primera instancia de las causas que se versen acerca de puntos regidos por tratados con las naciones extranjeras, y de las que se susciten entre dos o más provincias, y entre una provincia y un Estado extranjero, o entre vecinos de una provincia y un ciudadano extranjero. 3º Conoce en grado de apelación o nulidad de las demás causas de la jurisdicción nacional que le vayan de los juzgados de sección, con arreglo al artículo 22. 4º Conoce en grado de revisión, de todas las causas que queden expresadas, en los casos y en las formas que establezca una ley especial, que la misma Corte propondrá al Congreso por conducto del Poder Ejecutivo.

Art. 8º -- En casos de discordia o bien de impedimento, o de recusación o excusación justificadas, de uno o más miembros de la Corte Suprema, será ésta integrada por abogados particulares, que ella nombrará, y cuyos honorarios serán de cuenta del tesoro público.

Art. 9º -- La Corte no podrá expedir sentencia ni auto alguno que no sea de simple sustanciación, sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 10. -- De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, expresado en el inciso 4º del artículo 7º.

Art. 11. -- La Corte nombrará y podrá remover sus empleados subalternos. Además de su reglamento interno, dictará otro uniforme para todos los juzgados de sección. Avisará al Poder Ejecutivo el número, y propondrá las dotaciones de los empleados subalternos que resulten ser necesarios para el ejercicio de todo el Poder Judicial, a fin de que aquél solicite del Congreso la ley de su creación y sueldos.

Art. 12. -- Cada miembro de la Corte Suprema gozará del sueldo mensual de cuatrocientos pesos.

CAPÍTULO III

De los juzgados seccionales

Art. 13. -- La justicia nacional se ejercerá igualmente por medio de juzgados inferiores de sección.

Art. 14. -- Cada provincia formará uno o más juzgados seccionales según fuese necesario a juicio del Poder Ejecutivo.

Art. 15. — Los juzgados de sección serán unipersonales, y cuando en alguna causa fuese necesaria la intervención de un fiscal, podrán nombrar para este cargo a un abogado particular, cuyo honorario será de cuenta del tesoro nacional.

Art. 16. — En caso de impedimento, recusación o excusación, el juez lo avisará directamente al Poder Ejecutivo, el cual nombrará un suplente para aquella causa o causas, siendo su honorario a cargo también del tesoro nacional.

Art. 17. — Para ser juez de sección se necesita tener veinticinco años de edad y ser abogado argentino, con tres años al menos de ejercicio. Antes de entrar en funciones, jurará ante la autoridad que el Poder Ejecutivo delegue al efecto, el buen y fiel desempeño de su cargo.

Art. 18. — Los jueces seccionales propondrán a la Corte Suprema las personas que con arreglo al reglamento interno de sus juzgados hayan de desempeñar las funciones subalternas de ellos; y podrán removerlos por sí solos.

Art. 19. — Cada juez de sección gozará del sueldo mensual de doscientos pesos.

Art. 20. — Los juzgados de sección conocen en primera instancia, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de las que ocurran entre vecinos de diferentes provincias, procediendo entones con arreglo a lo establecido en el artículo 4º, y en las contencioso-administrativas y demás que interesen al fisco nacional; mas en las de contrabando, lo harán por ahora tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuanto en el resto de la República, ajustándose a las respectivas leyes y disposiciones dictadas y vigentes en ella.

Art. 21. — Pueden conocer en grado de apelación, de los fallos y resoluciones de los juzgados inferiores de provincia, en los casos regidos por la Constitución y leyes nacionales, siempre que el agraviado no prefiera ocurrir al juzgado o tribunal superior de la provincia.

Art. 22. — En todas las causas mencionadas en los dos artículos precedentes, habrá los ordinarios recursos de apelación o nulidad para ante la Corte Suprema.

Art. 23. — Cuando en un juzgado de provincia hubiere duda o cuestión sobre si el asunto de que se trata debe ser regido solamente por las leyes provinciales, y se decidiese en ese sentido, el agraviado podrá apelar para ante la Corte Suprema.

CAPITULO IV

Disposiciones especiales

Art. 24. — La presente ley será puesta en ejercicio luego que se halle instalada la Suprema Corte y los juzgados seccionales.

Art. 25. — El Congreso se reserva dictar las modificaciones o disposiciones que puedan ser necesarias, luego que se haya establecido la capital permanente o provisoria de la República.

Art. 26. — El Poder Ejecutivo podrá verificar los gastos previos que la ejecución de esta ley demandase.

Art. 27. — Comuníquese, etc.

6

Sr. Presidente. — La Comisión de Hacienda se ha expedido sobre la solicitud del empresario de la navegación del Bermejo, que quedará fijada como orden del día para la próxima sesión.

7

Sr. Vélez Sársfield. — Haré presente la necesidad del pronto despacho de los asuntos que el Poder Ejecutivo someta a la consideración del Congreso durante la prórroga. Con este motivo indicaré al Senado, que si ambas Cámaras pudieran tener sesión diariamente, podríamos abreviar el despacho de todos los asuntos y terminar mucho antes.

Sr. Presidente. — Creo que se trata de pedir el local de la Municipalidad. El presidente anunciará a la Cámara lo que resulte.

8

Sr. Madariaga. — Haré moción también para que se determine el día en que va a hacerse el escrutinio de las actas de la elección del presidente y vicepresidente.

Sr. Elizalde. — El señor presidente puede fijar el día, poniéndose de acuerdo con el señor presidente de la otra Cámara.

Sr. Alsina. — Como se han de reunir las dos Cámaras, es preciso el asentimiento de la otra. Por consiguiente, el señor presidente puede ponerse de acuerdo con el de la Cámara de Diputados y convenir en que se haga el lunes.

Así se acordó, levantándose la sesión a las cuatro de la tarde.